

## **Difusión por sindicato de una relación de puestos de trabajo. Informe 171/2004.**

Cesión de datos: difusión por un sindicato de los titulares de los puestos de una relación de puestos de trabajo

La consulta plantea si resulta ajustado a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la difusión a través de Internet de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Valencia, con indicación de las personas concretas que cubren cada uno de los puestos de trabajo de la misma, teniendo en cuenta que la mencionada sentencia 54/03 citada en la consulta “condena a la Diputación a que permita la utilización de la red Intranet para exponer la relación de puestos de trabajo”, si bien “se limita en el Fundamento Jurídico cuarto a reconocer la legitimidad genérica de la Diputación a censurar las páginas que contengan datos que no son objeto de publicación”.

Como cuestión previa a la resolución de la consulta planteada, debe indicarse que el artículo 16 de la Ley 30/1984, de 2 agosto, dispone que “Las Comunidades Autónomas y la Administración local formarán también la relación de los puestos de trabajo existentes en su organización, que deberá incluir, en todo caso, la denominación, tipo y sistema de provisión de los puestos, las retribuciones complementarias que les correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño. Estas relaciones de puestos serán públicas”.

Por su parte, el artículo 15.3 de la propia Ley dispone que “Las relaciones de puestos de trabajo serán públicas”, si bien mismo artículo, en sus apartados 1 a) y 1 b) delimita el contenido de las relaciones de puestos de trabajo, indicando que “las relaciones comprenderán, conjunta o separadamente, los puestos de trabajo del personal funcionario de cada Centro gestor, el número y las características de los que puedan ser ocupados por personal eventual así como los de aquellos otros que puedan desempeñarse por personal laboral” y “las relaciones de puestos de trabajo indicarán, en todo caso, la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que corresponda a los mismos, cuando hayan de ser desempeñados por personal funcionario, o la categoría profesional y régimen jurídico aplicable cuando sean desempeñados por personal laboral”.

En consecuencia, la Ley 30/1984 establece, por una parte, que las relaciones de puestos de trabajo serán públicas, pero por otra aclara que su contenido se refiere a la naturaleza del puesto de trabajo y no a los datos referentes a las personas que lo desempeñan en cada momento concreto.

Dicho esto, la difusión de los datos referentes a las personas integradas en la relación de puestos de trabajo de la Diputación Provincial de Valencia constituye una cesión de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Respecto de las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante. La cesión será lícita si la misma se encontrase reconocida por una norma con rango de Ley, tal y como establece el artículo 11.2 a).

En el presente supuesto, de lo que se indicó con anterioridad se desprende que la publicidad de las relaciones de puestos de trabajo se refiere a la descripción de los puestos existentes en la Administración correspondiente, pero no a los datos de carácter personal de los integrantes de la misma, por lo que la difusión de esos datos no encontraría su amparo en lo dispuesto en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica, siendo preciso el consentimiento de los afectados para proceder a esa difusión.

Lo anteriormente argumentado tampoco se vería contradicho por el hecho de que el nombramiento de los funcionarios apareciera recogido en el correspondiente Boletín Oficial, que ostenta según el artículo 3 j) de la Ley Orgánica 15/1999 la naturaleza de fuente accesible al público, lo que justificaría la cesión de los datos al amparo del artículo 11.2 b) de la Ley Orgánica 15/1999.

Ello se funda en que el artículo 21.3 de la Ley Orgánica particulariza la cesión que tenga su origen en una Administración pública, tratándose de datos contenidos en fuentes accesibles al público, indicando que “No obstante lo establecido en el artículo 11.2 b), la comunicación de datos recogidos de fuentes accesibles al público no podrá efectuarse a ficheros de titularidad privada, sino con el consentimiento del interesado o cuando una Ley prevea otra cosa”.

La solución planteada no resulta tampoco contraria a lo dispuesto en las normas reguladoras de la representación sindical en las Administraciones Públicas. En este sentido, esta Agencia Española de Protección de Datos emitió informe en fecha 19 de marzo de 2000, referido a la posibilidad de comunicación de los datos contenidos en las nóminas del personal, a los representantes del personal al servicio de la Administración, a los efectos del derecho de información de se reconoce a la representación colectiva, sindical y unitaria del personal al servicio de la Administración Pública.

En dicho informe se indicaba, literalmente, lo siguiente:

“el artículo 9 de la Ley 9/1987, reguladora de los Órganos de Representación y Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas enumera, como señala la consulta planteada, las funciones atribuidas a las Juntas de Personal, incluyéndose entre las mismas, no sólo la recepción de información, sino también “vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, seguridad social y empleo, y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes” (artículo 9.6) y “vigilar y controlar las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo” (artículo 9.7).

Por su parte, el artículo 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, establece el carácter público de las Relaciones de Puestos de Trabajo, si bien las mismas, no contendrán, a la vista del contenido exigido por el artículo 15.1 b), los datos del personal concreto que ocupe un determinado puesto de trabajo, sino exclusivamente las características de cada uno de los puestos de trabajo existentes en cada Dependencia Administrativa, siendo los datos personales referidos a cada funcionario público, de acceso restringido a éste último, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.5, párrafo segundo de la propia Ley 30/1984.

Se hace preciso, en consecuencia, coherencia las atribuciones conferidas a la Junta Superior de Personal en la Ley 9/1987 con la protección otorgada a los datos automatizados de carácter personal, regulada en la Ley Orgánica 15/1999, y con los límites previstos en el artículo 21 para la posible cesión de esos datos.

Pues bien, a nuestro juicio, la función de vigilancia y protección de las condiciones de trabajo, atribuida a las Juntas de Personal por la Ley 9/1987

puede llevarse a adecuado desarrollo sin necesidad de proceder a una cesión masiva de los datos referentes al personal que presta sus servicios en el Órgano o Dependencia correspondiente. Sólo en el supuesto en que la vigilancia o control se refieran a un sujeto concreto, que haya planteado la correspondiente queja ante la Junta de Personal, será posible la cesión del dato específico de dicha persona.

En los demás supuestos, la función de control quedará plenamente satisfecha, a nuestro juicio, mediante la cesión a la Junta de Personal de información debidamente dissociada, según el procedimiento definido en el artículo 3 f) de la Ley Orgánica 15/1999, que permita a aquélla conocer las circunstancias cuya vigilancia le ha sido encomendada sin referenciar la información en un sujeto concreto.

En consecuencia, procederá, en caso de haber sido formalmente solicitada, la cesión de los datos solicitados, siempre que los mismos sean cedidos de forma agregada, sin poder referenciar los datos a personas identificadas o identificables. En caso contrario, deberá recabarse el consentimiento de los interesados, conforme exigen los artículos 11 y 21 de la Ley Orgánica 15/1999”.

En el mismo sentido, en informe de 23 de julio de 1993, se indicaba:

“Analizados los antecedentes aportados, y siendo además preciso tener en cuenta el principio de reserva de Ley para cualquier limitación del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, consagrado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, esta Agencia se ratifica en lo ya indicado en su anterior informe, no procediendo la cesión masiva solicitada salvo en relación con aquellos datos (tales como los correspondientes al complemento de productividad) respecto de los que la Ley expresamente reconoce su carácter público.

En los restantes supuestos, en virtud de lo ya fundamentado en nuestro anterior informe, sólo será posible la cesión de datos referidos al control de un determinado supuesto de hecho, no procediendo su cesión masiva.”

A la vista de lo anterior, esta Agencia considera que la difusión de los datos referentes a los funcionarios que ocupan los puestos de trabajo contenidos en la relación de puestos de trabajo no encuentra su amparo en ninguna disposición con rango de Ley, no siéndolo en ningún caso previsión de tal

naturaleza un acuerdo suscrito en una mesa de negociación, por lo que, desde el punto de vista de las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, no procede la difusión masiva de dichos datos si no se cuenta con el consentimiento de los afectados.